1.1.

Introducción y Orientaciones de Política Económica

El Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023 se elabora en un momento, octubre de 2022, marcado por una coyuntura económica internacional condicionada por las repercusiones que está teniendo, en todos los órdenes, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el 24 de febrero del presente año. Un conflicto bélico surgido cuando se estaba saliendo de la mayor crisis económica vivida en tiempos de paz, la crisis de la COVID-19, con consecuencias muy relevantes en materia energética y de precios, y que ha provocado un ajuste en las expectativas económicas y geopolíticas a nivel mundial.

De esta forma, y como consecuencia más inmediata, se ha profundizado en los problemas de suministro en las cadenas globales de producción, que ya se manifestaron en la segunda mitad del año 2021, y ha derivado en un agravamiento de la subida de los precios energéticos, llevando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios a registros que no se conocían en los últimos cuarenta años.

Estas circunstancias suponen una clara amenaza para la consolidación y avance en el proceso de recuperación económica que se puso de manifiesto el pasado año 2021, en el que Andalucía empezó a recuperar los niveles prepandemia, del año 2019, especialmente en indicadores relevantes como el empleo, el tejido empresarial, las exportaciones internacionales o la captación de inversión extranjera, alcanzando en muchos casos registros históricos.

Así, tras la profunda caída de 2020 como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la economía andaluza inició en 2021 un proceso de recuperación, finalizando el año con un crecimiento medio anual del PIB del 5,2%, en línea con la media en la Eurozona (5,2%).

En 2022, como se ha comentado anteriormente, el panorama económico internacional se ha visto alterado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, con una guerra

en la misma frontera de la UE, que empieza a trasladarse en una moderación del ritmo de crecimiento europeo.

Según los últimos datos publicados por Eurostat, el PIB de la UE ha registrado en el segundo trimestre un crecimiento interanual del 4,2% (4,1% en la Eurozona), 1,3 puntos menos que en el primer trimestre del año (5,5% la UE y 5,4% la Zona Euro). Una desaceleración del ritmo de crecimiento que ha experimentado de manera especial la principal economía del área, Alemania, donde el ritmo de crecimiento se ha reducido a la mitad, pasando del 3,5% en el primer trimestre al 1,7% en el segundo. También se ha moderado el ritmo de crecimiento en otras economías relevantes del área como Francia (4,7% en el primer trimestre, 4,2% en el segundo) e Italia (6,3% en el primer trimestre, 4,7% en el segundo). Mientras, en España, según la última información publicada por el INE el 23 de septiembre, el ritmo de crecimiento del PIB ha sido del 6,7% interanual en el primer trimestre y 6,8% en el segundo; en ambos casos, revisando al alza en torno a medio punto el avance del PIB publicado a finales de julio.

Las consecuencias económicas para Andalucía del conflicto bélico en Ucrania son difíciles de cuantificar. En cualquier caso, los efectos vienen más por la vía del impacto que el conflicto está teniendo en variables monetarias, como los precios y tipos de interés, y su traslación en un freno del proceso de recuperación económica, que por la vía del impacto en los ingresos por cuenta corriente (comercio y turismo), dada la limitada exposición que la economía andaluza tiene a las economías rusa y ucraniana (el turismo ruso representa el 2,8% del gasto turístico internacional en Andalucía, y las exportaciones a Rusia y Ucrania menos del 1% del total).

En este contexto, en base a la última información publicada el 12 de agosto, de la *Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía*, elaborada por el IECA, el PIB de la economía andaluza ha registrado un crecimiento interanual del 5,9% en el segundo trimestre de 2022, casi un punto por debajo del alcanzado en el trimestre anterior (6,8%) y en la economía española (6,8%); si bien, superando en casi dos puntos la media en la Eurozona y la UE (4,1% y 4,2% interanual, respectivamente).

Si se compara con el nivel prepandemia, del cuarto trimestre de 2019, el PIB de Andalucía se encontraría un 1,9% por debajo de dicho nivel, mientras que el de España está un 2,2% por debajo; por tanto, Andalucía está más próxima de recuperar los niveles de antes de la pandemia, que el conjunto nacional.

Tras estos resultados, el balance en la primera mitad del año en Andalucía es de un crecimiento real del PIB del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la Zona Euro y la UE (4,8% y 4,9%, respectivamente), retomando el proceso de convergencia con su entorno europeo interrumpido en los años 2020 y 2021 por la pandemia.

Un crecimiento de la economía andaluza en el primer semestre que se explica, por el lado de la demanda, por la contribución positiva tanto de la vertiente interna como externa. En concreto, la demanda interna ha aportado 3,6 puntos, con un fuerte aumento de la inversión (6,8% interanual), y más moderado del consumo (2,6%), destacando el de los hogares (3,9%); junto a ello, el sector exterior ha contribuido con 2,7 puntos, resultado de un incremento de las exportaciones de bienes y servicios del 21,4%, casi el doble que las importaciones (11%).

Más específicamente, en el comercio de mercancías con el extranjero, las exportaciones andaluzas han alcanzado hasta el mes de julio un nivel de casi veinticinco mil millones de euros (24.992 millones), un máximo histórico en igual periodo, siendo Andalucía la tercera comunidad autónoma más exportadora, por detrás de Cataluña y Madrid. Comparado con el mismo periodo de 2021, las exportaciones al extranjero de Andalucía se han incrementado un 26,9%, por encima de la media en España (24,2%), y superando en más de 5.000 millones de euros la cifra de exportación anterior a la pandemia (19.637,5 millones de euros entre enero y julio de 2019).

Desde la óptica de la oferta productiva, se han registrado aumentos generalizados en los sectores no agrarios, mientras que el primario presenta una ligera caída del -0,6% interanual en el semestre, en una situación meteorológica caracterizada por la sequía, que está afectando al agrario andaluz, en un contexto en el que en el conjunto de la economía española el balance del sector en el semestre ha sido positivo (1,3%).

El mayor crecimiento lo ha registrado el sector servicios, que ha crecido en Andalucía un 7,5%, en línea con la media nacional (7,7%), destacando los resultados en *Comercio, Transporte y Hostelería* (20,4%), favorecido por el levantamiento de las restricciones al turismo. Le ha seguido la construcción, con un crecimiento en Andalucía del 5,2%, muy superior a la media nacional (2,8%) y tras dos años de caída; y el sector industrial, que ha crecido un 4,4% interanual de media en el primer semestre, de manera más intensa también que en el conjunto de la economía española (3,6%).

En el mercado laboral, según la *Encuesta de Población Activa (EPA)*, el ritmo de crecimiento del empleo ha sido del 3,9% interanual en el segundo trimestre en Andalucía (4% en España), marcando en ambos casos un proceso de desaceleración del crecimiento, ya que en el primer trimestre el empleo aumentó un 5,4% en Andalucía (4,6% de media a nivel nacional). El balance del primer semestre de esta forma es de un crecimiento de la población ocupada en Andalucía del 4,7%, cuatro décimas superior a la media de la economía española (4,3%). Con ello, se ha alcanzado un nivel máximo histórico de personas ocupadas en Andalucía (3.278.500 personas en el segundo trimestre de 2022) y la tasa de paro se ha situado en el 18,7%, su nivel más bajo desde 2008.

La información más adelantada que se conoce del comportamiento del mercado laboral en el tercer trimestre muestra que continúa la moderación del ritmo de creación de empleo, a la vez que se resiente también el ritmo de descenso del número de parados, en sintonía con lo que se observa en España.

En concreto, en el mes de septiembre, última información publicada, el número de afiliados a la Seguridad Social crece en Andalucía a un ritmo del 2,9% interanual (3,3% a nivel nacional), y el número de parados registrados al cierre del mes se reduce un -2,7% respecto a septiembre de 2021 (-9,7% en el conjunto de la economía española). Con todo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en su nivel más alto en dicho mes (3.251.254 afiliados) en la serie histórica y el paro registrado (779.282 personas paradas) es el menor al cierre de un mes de septiembre desde 2019.

En el tejido empresarial, el número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social al cierre de septiembre en Andalucía se ha situado en 243.703, la más elevada en un mes de septiembre desde 2019. Comparado con septiembre de 2021, se contabiliza un aumento de 2.257 empresas, lo que supone un incremento del 0,9% interanual, ligeramente por encima de la media nacional (0,8%), mostrando en ambos casos una trayectoria de desaceleración del ritmo de crecimiento respecto a lo observado en el primer semestre.

Todos estos resultados se producen en un contexto marcado por un fuerte repunte de los precios, derivado en gran medida de los elevados precios de los productos energéticos (combustibles, gas y electricidad), y su traslación prácticamente al resto de bienes y servicios, que ha llevado a la tasa de inflación de la economía española y andaluza a cifras de dos dígitos en los meses centrales del año. De esta forma, la tasa de inflación andaluza y española superó el diez por ciento en los meses de junio, julio y agosto, niveles que no se registraban desde 1986, año en el que se produjo la entrada de España en la actual Unión Europea; esta tasa se ha moderado en septiembre, situándose en el 9,2% en Andalucía (8,9% en España), ligeramente por debajo de la media en la eurozona (10% según el indicador adelantado publicado por Eurostat), en cualquier caso, registros históricamente elevados.

Pero el problema no es solo la subida de precios de la energía, sino que es de base más amplia, ya que la *inflación subyacente*, que mide el comportamiento más estructural de la inflación, al no tener en cuenta los precios más volátiles (el de los *alimentos no elaborados* y los *productos energéticos*), se sitúa en el 6,6% en Andalucía en septiembre del presente año, 6,2% en España y 6,1% en la Zona Euro.

Estas elevadas tasas de inflación suponen sin duda un freno al proceso de recuperación, dado que en primera instancia limita el consumo, debido a la pérdida de poder adquisitivo a la que se enfrentan los trabajadores. Con la última información disponible del mes de septiembre, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados en Andalucía se sitúa en el 2,72%, por encima de la media en España (2,61%), estando por tanto el crecimiento de los salarios en convenio en Andalucía y España más de seis puntos por debajo de la inflación.

Esta pérdida de poder adquisitivo de los salarios se está dejando sentir ya en el comportamiento del consumo de los hogares, que con la última información disponible ha

pasado de crecer en Andalucía de una tasa interanual del 4,8% en el primer trimestre de 2022, al 3,1% en el segundo; es decir, ha moderado su ritmo de crecimiento 1,7 puntos.

De otro lado, las tensiones inflacionistas están llevando a las autoridades monetarias a nivel mundial a aplicar políticas monetarias más restrictivas, con subidas de tipos de intervención y reducción de estímulos, configurando un escenario de previsible menor crecimiento económico con riesgos inflacionistas. El Banco Central Europeo (BCE) subió en julio el tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Euro-sistema por primera vez en 11 años, en medio punto porcentual hasta el 0,50%, y en su reunión de septiembre lo ha subido en 0,75 puntos básicos, la mayor subida que jamás haya hecho, hasta dejarlo situado en el 1,25%, lo cual va a suponer un entorno más restrictivo para la financiación de las empresas y las familias.

De hecho, el *Euribor* a un año, principal índice de referencia, entre otros aspectos, de los préstamos hipotecarios en España, ha roto la barrera del 2%, lo que no ocurría desde diciembre de 2011, y ha pasado de estar situado en torno al -0,5% a principios de año, a superar el 2,5% a principios de octubre.

En consonancia con el agravamiento de la situación económica mundial, los diferentes organismos e instituciones que realizan previsiones, tanto en el ámbito regional como en el nacional e internacional, han venido realizando revisiones a la baja en sus estimaciones de crecimiento económico.

Considerando las últimas previsiones que se han venido publicando, la OCDE, en su informe intermedio de Perspectivas Económicas publicado a finales del mes de septiembre, sitúa el crecimiento económico mundial en el 3% en 2022, lo que supone un recorte de 1,5 puntos respecto a su pronóstico de septiembre de 2021, cuando se elaboró el *escenario macroeconómico de Andalucía para el Proyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 2022*. Similar es la previsión del mes de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha estimado un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2022, frente al 4,9% que preveía hace un año.

En el entorno más cercano, para la Zona Euro, las previsiones publicadas por el Banco Central Europeo (BCE) en el mes de septiembre, estiman un crecimiento del 3,1% en 2022, casi dos puntos inferior al que se preveía hace un año (5%), y coincidente con el último pronóstico del FMI (3,1%).

Para la economía española, todos los pronósticos de los organismos oficiales se han visto revisados a la baja a lo largo del último año. Considerando las más recientes publicadas en octubre, el FMI ha situado en el 4,3% su previsión de crecimiento de la economía española en 2022, 2,1 puntos por debajo de su pronóstico de octubre de 2021 (6,4%). En similares términos, el Banco de España, en su último informe de proyecciones de octubre, estima un crecimiento del 4,5% de la economía española en

2022, 1,4 puntos inferior a su previsión de septiembre de 2021 (5,9%). Y el Gobierno de España, en el *Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023*, establece un crecimiento real de la economía española del 4,4% en 2022, lo que supone 2,6 puntos menos respecto al escenario de octubre del pasado año (7%).

Con todo ello, el promedio de crecimiento esperado en 2022 por los organismos oficiales (FMI, OCDE, Comisión Europea, Banco de España y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) para la economía española, ha pasado del 6,3% en octubre de 2021, al 4,3% en octubre de 2022, lo que supone una revisión a la baja de dos puntos.

En el ámbito de las instituciones privadas, el consenso del último Panel de Funcas, publicado el 14 de septiembre de este año, señala un crecimiento real del PIB en España del 4,2% en 2022, 1,9 puntos menos que en el panel de septiembre de 2021 (6,1%).

A la vista de las revisiones realizadas sobre las previsiones de crecimiento de la economía española en 2022, todas a la baja, la trayectoria económica es de desaceleración del crecimiento (en 2021 el crecimiento fue del 5,5%), a diferencia de lo que se preveía en octubre de 2021, cuando de forma unánime se esperaba una aceleración.

Una ralentización del crecimiento que se va a acentuar en el próximo año 2023, en el que la economía mundial va a seguir condicionada por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, y la grave crisis energética provocada en Europa, y el deterioro de los niveles de vida derivado de las fuertes tensiones inflacionistas.

El FMI, en su informe de octubre, pronostica un crecimiento de la economía mundial del 2,7% en 2023, medio punto inferior al del año anterior, siendo más bajo el previsto por la OCDE (2,2%).

En el entorno más próximo, la Zona Euro, el Banco Central Europeo, en su último informe de previsiones de septiembre, pronostica un crecimiento en 2023 del 0,9%, que el FMI reduce hasta el 0,5%, con caídas en Alemania (-0,5%) e Italia (-0,2%).

Para la economía española, la previsión de crecimiento del FMI es del 1,2% en 2023, más de tres puntos inferior a la esperada para 2022 (4,3%). Esta previsión del FMI se sitúa por debajo de lo que recientemente han publicado otros organismos como el Banco de España (1,4%), la OCDE (1,5%) y, sobre todo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (2,1%).

Este contexto exterior de la economía andaluza, se espera que venga acompañado de unas condiciones de financiación caracterizadas por un aumento de los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, así como una depreciación del tipo de cambio del euro frente al dólar.

En su último informe, el Banco de España prevé para 2022 un aumento de los tipos de interés tanto a corto como a largo plazo, en contraste con el práctico mantenimiento de los mismos que se esperaba en septiembre del pasado año. En concreto, para el corto plazo, el Euribor a tres meses aumentaría casi un punto, en promedio anual, pasando del -0,5% observado en 2021 al 0,3% en 2022. Para el largo plazo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años sería del 2,2%, casi dos puntos superior al observado el pasado año (0,3%).

Para 2023, el Banco de España espera que continúe esta trayectoria de subida de tipos de interés, hasta el 2,9% el Euribor a tres meses, y hasta el 3,4% el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años.

En relación con el tipo de cambio de la moneda única, el Banco de España estima que la cotización del euro respecto al dólar sea de 1,04 dólares por euro de media en 2022, cotización un -11,9% inferior a la registrada en 2021 (1,18 dólares por euro). Esta depreciación del euro frente al dólar tendría continuidad en 2023, con una cotización media ligeramente por debajo de la paridad, de 0,98 dólares por euro, un -5,8% inferior a la esperada para el presente año.

Por otra parte, en relación a la evolución de los precios de las materias primas, el Banco de España espera una subida del precio del petróleo en 2022 del 44,7%, mientras en septiembre de 2021 se pronosticaba un práctico estancamiento (0,6%). Con este incremento, el precio de esta materia prima, de notable incidencia en la actividad económica, se situaría de media en 2022 en 102,9 dólares, su nivel más elevado en un año desde 2013.

En contraste con lo esperado para este año, el Banco de España pronostica una reducción del precio del petróleo para 2023, hasta los 79,5 dólares el barril de *Brent* de media en el año, un -22,7% inferior.

Teniendo en cuenta todas estas variables, que configuran los supuestos básicos que fundamentan el escenario macroeconómico de Andalucía 2022-2023, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos prevé que el crecimiento real del PIB sea del 4,3% en Andalucía en 2022, lo que supone una desaceleración respecto al 5,2% registrado en 2021. Para 2023, se prevé que el ritmo de crecimiento de la economía andaluza se desacelere 2,4 puntos más, hasta el 1,9%.

La previsión de crecimiento de la economía andaluza para 2022 que incorpora este escenario macroeconómico de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, está en sintonía con las previsiones de otras instituciones que realizan previsiones macroeconómicas para Andalucía (Analistas Económicos de Andalucía de Unicaja, BBVA Research, CEPREDE, Funcas, Hispalink, Observatorio Económico de Andalucía y Universidad Loyola Andalucía) ya que el promedio de las mismas se sitúa actualmente en el 4,2% de crecimiento real.

El crecimiento económico previsto para Andalucía en 2022 estaría también en línea con el promedio esperado actualmente por los organismos oficiales (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España, Comisión Europea, FMI y OCDE) para la economía española (el consenso refleja un avance del 4,3%).

También está en línea con lo que estiman de media las instituciones privadas para el conjunto de la economía española; el consenso del último Panel de Funcas, publicado el pasado mes de septiembre, señala un crecimiento de la economía española del 4,2% en 2022.

Comparado con el entorno europeo, este crecimiento previsto para la economía andaluza en 2022 estaría 1,2 puntos por encima del estimado tanto por el BCE como por el FMI para el conjunto de la Zona Euro (3,1%), lo que permitiría retomar el proceso de convergencia económica con Europa, tras la interrupción de 2020 y 2021 por la pandemia de la COVID-19.

Por el lado de la demanda, el crecimiento vendrá sustentado en la aportación positiva tanto de la demanda interna como del sector exterior, con mayor protagonismo de la primera, como ya sucedió en 2021.

En la demanda interna, la inversión experimentará un mayor avance que el consumo, sustentado este último especialmente en el consumo privado.

Por otro lado, la contribución del sector exterior al crecimiento vendrá explicada por el fuerte impulso de las exportaciones de bienes, y sobre todo por la recuperación de la de servicios, una vez eliminadas prácticamente todas las restricciones al turismo.

En el ámbito de la oferta, se espera en 2022 un crecimiento generalizado de los sectores no agrarios, que compense la caída del sector primario, afectado por la situación de sequía.

El crecimiento real de la economía andaluza en 2022 se producirá en un contexto nominal de subida de los precios de producción, aumentando el deflactor del PIB un 3,5%, según lo previsto por el Banco de España para la economía española en su conjunto.

De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución esperada para el deflactor del PIB, la economía andaluza registraría en 2022 un crecimiento del PIB del 8%, en términos corrientes, que situaría el PIB nominal de la comunidad autónoma próximo a los 184.000 millones de euros, superando ampliamente el máximo alcanzado en 2019 (173.101 millones de euros).

El crecimiento de la economía andaluza en 2022 se traduciría, en el ámbito laboral, en un aumento de la población ocupada estimado en el 3,2% de media en el año, 1,1 puntos por debajo del observado en 2021 (4,3%), lo que supondría la creación de unos

100.800 empleos, quedando la población ocupada próxima a las 3.252.000 personas, por encima del máximo registrado en 2007, antes de la Gran Recesión. Este aumento de la ocupación reduciría en 1,9 puntos porcentuales la tasa de paro hasta una media del 19,8% de la población activa en el conjunto del año, la más baja desde 2008.

Para 2023, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos prevé un crecimiento real de la economía andaluza del 1,9%, 2,4 puntos inferior al esperado para el presente año (4,3%).

Estas previsiones macroeconómicas de Andalucía para 2023 han sido avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la AIReF. La AIReF ha avalado como factibles estas previsiones macroeconómicas para 2023 de Andalucía.

Este crecimiento previsto para Andalucía en 2023 es acorde a lo que estiman de media las instituciones privadas para el PIB nacional, señalando el consenso del último Panel de Funcas, publicado el pasado mes de septiembre, un crecimiento de la economía española del 1,9% en 2023.

De otro lado, se situaría ligeramente por encima del promedio esperado por los organismos oficiales (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España, Comisión Europea, FMI y OCDE) para la economía española (1,7%), sobre todo de los últimos pronósticos publicados por el FMI (1,2%) y el Banco de España (1,4%).

Respecto al entorno europeo, el crecimiento esperado para la región estaría por encima del estimado para el conjunto de la Zona Euro (0,9% según el BCE, 0,5% según el FMI), lo que permitiría dar continuidad al proceso de convergencia económica con Europa.

En comparación con el resto de las instituciones que realizan previsiones para Andalucía, la previsión del 1,9% de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se encuentra dentro del intervalo de los pronósticos, que van desde un 1,9% (Universidad Loyola Andalucía) hasta un 2,6% (CEPREDE), sin tener en cuenta algunas de ellas que fueron realizadas en abril o mayo, sin recoger el recorte a la baja que se viene produciendo en los últimos meses.

El próximo año, el crecimiento de la economía andaluza estaría sustentado, en el lado de la demanda, por la aportación positiva de la demanda interna, ya que el sector exterior tendría una contribución negativa, en contraste con la aportación positiva esperada para el presente año.

En la demanda interna, la inversión de nuevo experimentaría un mayor avance que el consumo, en el que el ritmo de crecimiento del consumo privado, como en 2022, superaría al público.

A diferencia de la demanda interna, en 2023 el sector exterior pasaría a contribuir negativamente en el crecimiento regional, consecuencia de un avance de las importaciones de bienes y servicios por encima del esperado para las exportaciones.

Por el lado de la oferta, se prevé que en 2023 todos los sectores contribuyan positivamente al crecimiento de la economía andaluza, con una mayor intensidad en el avance de los sectores de la construcción y la agricultura, si bien este último con la incertidumbre que genera la situación meteorológica.

El crecimiento real de la economía andaluza en 2023 se produciría en un contexto nominal de subida de los precios, con un aumento del deflactor del PIB de un 4,5%, que es lo esperado por el Banco de España para el conjunto de la economía española.

Con esa evolución esperada para el deflactor del PIB y el crecimiento real previsto, la economía andaluza registraría en 2023 un crecimiento del PIB del 6,5%, en términos corrientes, que situaría el PIB nominal de la comunidad autónoma próximo a los 195.900 millones de euros.

En el ámbito laboral, el crecimiento de la economía andaluza en 2023 se traduciría en un aumento de la población ocupada estimado en el 2,1%, 1,1 puntos inferior al previsto para 2022 (3,2%), lo que supondría crear unos 68.300 empleos, quedando la población ocupada próxima a los 3.320.200 de personas. Este aumento de la ocupación reduciría un punto porcentual la tasa de paro hasta situarse por debajo del 19% de la población activa.

Conviene hacer hincapié en el alto grado de incertidumbre que acompaña este *escenario macroeconómico de Andalucía 2022-2023*. Incertidumbre asociada a la evolución de diferentes riesgos, entre los que destaca especialmente la duración y el desenlace que pueda tener la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Y unido a esto, la mayor o menor persistencia de las tensiones inflacionistas, y con ello de la continuidad o no de la política monetaria restrictiva de los bancos centrales, con las consecuencias que ello tiene para la política fiscal y la solvencia financiera de las empresas.

Hay que tener en cuenta también las incertidumbres vinculadas a la evolución de la pandemia de la COVID-19, aún no del todo resuelta, ya que, aunque la incidencia de la enfermedad se ha visto reducida considerablemente hasta el punto de levantarse prácticamente todas las restricciones, el riesgo no ha desaparecido. Tanto es así, que en China se han producido recientemente confinamientos tras la aparición de brotes del virus en determinadas zonas, lo que está afectando a la producción industrial del país y su comercio exterior, y por tanto a los suministros en el resto de los países.

Adicionalmente, hay que señalar las incertidumbres también derivadas del ritmo en la asignación y ejecución de los fondos *Next Generation EU*, y sus efectos multiplicadores reales en la actividad económica.

De acuerdo con el escenario global descrito y las elevadas cotas de incertidumbre, es importante destacar que la orientación restrictiva de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo no es fácil que revierta a corto plazo, dada la máxima preocupación por la subida generalizada del nivel de precios y la elevada dependencia de la Eurozona de las importaciones de combustibles fósiles desde Rusia. Pero más allá del efecto directo del encarecimiento del gas sobre la inflación, las presiones inflacionistas se alimentan también a través de los mayores costes de producción de las empresas, puesto que el gas natural es la principal fuente de energía de los sectores industrial y de la mayor parte de los servicios, y por su impacto en la formación del precio de la electricidad. Además, la moderación de la actividad económica en los países europeos más golpeados (como Alemania) se transmitirá, vía flujos comerciales, al resto de economías en forma de una menor demanda exterior. Entre estas economías perjudicadas se encuentra la española y, por supuesto, la andaluza.

Asimismo, no se puede descartar el riesgo de que los márgenes empresariales y los salarios no se contengan suficientemente para evitar una retroalimentación que acabe generando una espiral inflacionista. En definitiva, todas estas amenazas están estrechando el poder de compra de las rentas de hogares y de empresas, deteriorando los indicadores de confianza de los agentes y, en consecuencia, dañando las perspectivas de crecimiento económico, estimándose ahora un avance de la actividad y el empleo más moderado del que se esperaba a principios del año 2022.

En este entorno difícil: con costes energéticos elevados, inflación bastante persistente, tipos de interés más altos, menor demanda externa y un tipo del euro más depreciado, y con muchas incógnitas en el horizonte, la política económica -también, la presupuestaria- desempeña un papel fundamental, aunque arriesgado, ya que debe contener los costes de la inflación, pero sin desviarse del objetivo de corrección de los desequilibrios.

En este punto, conviene recordar que los principales organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea), así como las autoridades monetarias (Banco Central Europeo y el propio Banco de España) han advertido que las actuaciones que amortigüen el impacto de la inflación deberían ser temporales o limitadas y estar focalizadas en los hogares de rentas más bajas, en los colectivos más vulnerables y en las empresas de los sectores más afectados por la perturbación externa, procurando evitar distorsiones significativas en los mercados.

Desde la perspectiva de Andalucía, estas recomendaciones deben ser tomadas en consideración y acompañar así las decisiones presupuestarias al esfuerzo que conlleva el deseable pacto de rentas del sector privado, de momento sin concretar. Más allá, de este acuerdo esperado entre los agentes sociales para contener márgenes empresariales y salarios, también en el sector público, resulta necesario consensuar entre todas las Administraciones Públicas una estrategia de medio plazo que defina un plan de consolidación fiscal plurianual y que incluya un nuevo sistema de financiación autonómica y una revisión de la eficiencia (evaluación) del gasto público.

Esta voluntad de practicar el debate moderado, abierto y libre de crispación está en el espíritu del Gobierno de Andalucía que cree en una gobernanza multinivel válida, tal y como demuestra la experiencia de integración europea, que desde la lealtad institucional consigue acuerdos. En este sentido, se requiere avanzar en la arquitectura del Estado de las Autonomías, en línea con lo establecido en la Constitución Española, para hacer compatible la descentralización con la solidaridad interterritorial, que dispone de recursos para nivelar las diferencias de capacidad fiscal de las Comunidades.

El logro de este objetivo significaría comenzar a corregir la posición de desventaja de Andalucía en el sistema de distribución de la financiación por habitante, tal y como ponen de manifiesto diversas investigaciones académicas durante el periodo 2002-2020 (Ángel de la Fuente, FEDEA).

Se esperaba que el *Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia* del Gobierno de España fuese un mecanismo de dotación de recursos que contribuyera a paliar las deficiencias en financiación, pero el ritmo de ejecución efectiva de estas ayudas (mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las comunidades autónomas) no está cumpliendo las expectativas generadas.

No obstante, el Gobierno de la Junta de Andalucía cree firmemente que ahora es el momento de asumir nuevos retos económicos y sociales, en concordancia con los objetivos de transición hacia una sociedad más ecológica, digital e inclusiva. En este sentido, comparte los criterios de la Unión Europea y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reconociendo la necesidad de poner en marcha las estrategias regionales en materia de innovación, digitalización, transformación económica, focalizando los apoyos especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Todo ello en el marco del Pacto Verde Europeo y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Con este propósito de alinear la política económica de la Junta de Andalucía con los criterios y prioridades que se definen en la Política de Cohesión del nuevo marco financiero plurianual de la UE para el periodo 2021-2027 y con los que subyacen en el NGEU, fue aprobada por el Consejo de Gobierno, en mayo de 2022, la Estrategia de Transformación Económica de Andalucía Horizonte 2027. Este documento constituye una referencia sobre los grandes objetivos de las principales políticas sectoriales de Andalucía, ya que es fruto de la conjunción y coordinación de los centros directivos de la Administración regional.

En este sentido, la Estrategia pretende corregir y superar los sucesivos impactos económicos negativos que ha generado la crisis de la pandemia de la COVID-19, así como los provocados por los cuellos de botella y posteriormente, el grave impacto de la guerra en Ucrania y la consecuente crisis energética. Precisamente el apoyo a la transición productiva y el ahorro energético para ir reduciendo la dependencia de

las energías fósiles es uno de los pilares estratégicos de la ETEA, dentro del titulado sostenibilidad.

Adicionalmente, dentro de este bloque temático, se incluye como una prioridad de la política económica de la Junta de Andalucía, más evidente ante la gravedad de la sequía, el optimizar la gestión de los recursos hídricos. La mejora de esta gestión requiere de una política específica por parte de las Administraciones que aborde los desafíos actuales y futuros en materia de gestión del agua, incluida la contaminación hídrica, las inundaciones, la escasez y las sequías.

En este ámbito, se requiere completar y modernizar los sistemas de abastecimiento urbano de agua para garantizar el suministro, mejorar la eficiencia, disminuyendo las fugas y completar los sistemas de depuración de aguas residuales urbanas, tanto para culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua, como para mejorar la calidad de las aguas continentales y litorales. Es necesaria también una nueva ética del agua que tenga en cuenta la fragilidad del recurso y haga compatible la garantía de las demandas de todos los usos con el cuidado del medioambiente.

Por otra parte, resulta fundamental lograr mayores dosis de competitividad en nuestra economía, a través de la incorporación de la innovación y la asimilación de las nuevas tecnologías digitales; del impulso al emprendimiento; de la internacionalización de las empresas y de la atracción de grandes inversiones; así como mediante la diversificación del tejido productivo, incorporando nuevos procesos industriales, a la vez que se pretende la modernización de los sectores tradicionales; todo ello, unido a la mejora de la calidad del sistema educativo, que favorezca la adecuación del capital humano a las necesidades de los sectores productivos.

Precisamente, cabe recordar que el tejido empresarial andaluz presenta históricamente una mayor fragilidad que la del promedio nacional, sobre todo por su mayor atomización, lo que ha tenido un efecto inmediato en sus cifras de negocio. Esta situación ha hecho más vulnerable al conjunto empresarial en Andalucía, que ya sufría otras debilidades estructurales, que se traducen en una menor renta per cápita y una baja productividad, variables estas que también se relacionan con los niveles más reducidos de competitividad regional.

Por todo ello, resulta imprescindible que Andalucía aborde como prioridad el incremento de la producción de bienes y servicios innovadores de alto valor añadido, así como la incorporación de tecnologías y formas organizativas más eficientes, que contribuyan a generar ganancias en productividad. Las medidas para estas prioridades están contenidas en el bloque competitividad de la ETEA. Muchos de estos aspectos, que forman parte de la competitividad estructural, son imprescindibles para converger y mejorar en la capacidad para atraer nuevas inversiones e incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía, así como los niveles de bienestar social.

Adicionalmente, la ETEA considera el territorio como un ámbito fundamental y estratégico, dada la singularidad que tienen los distintos espacios geográficos y humanos en una región tan extensa como Andalucía. Esta dimensión territorial está en la base de las políticas de desarrollo inteligente (S4) que promueve la UE para fomentar el aprovechamiento del potencial endógeno de las regiones y en la búsqueda de la competitividad de los espacios territoriales (comarcas, áreas metropolitanas y municipios) que conforman la Comunidad Autónoma. De este modo, se pretende no solo facilitar el buen desempeño de las políticas de promoción económica, sino también aminorar los desequilibrios territoriales existentes dentro de Andalucía.

Estos avances permitirán aumentar la demografía empresarial, el nivel y calidad del empleo y la prestación de servicios públicos, es decir, alcanzar mayores cotas de bienestar para la sociedad, mejorando la calidad de vida de los andaluces. De hecho, los objetivos de la política económica de la Junta de Andalucía en este campo pasan por reducir los niveles de desigualdad y el riesgo de exclusión social, aspirando a superar las cotas en materia de salud, atención a la dependencia y vivienda, así como reforzando las funciones de los servicios públicos de empleo y formación, bajo el enfoque del aprendizaje permanente.

Con un carácter transversal, conviene subrayar que todas estas prioridades estratégicas se vinculan a una mejora de la gobernanza, de revisión de la calidad institucional, del marco regulatorio, de los modos en los que se comunica y coopera la Administración autonómica, con el fin de hacerla más inclusiva, abierta y cercana a los ciudadanos, a los agentes económicos y compatible con otras Administraciones Públicas, en aras de lograr una mayor eficiencia para el conjunto de la sociedad andaluza.